

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### RAMA JUDICIAL

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

**Medellín, veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario laboral instaurado por MARÍA YANITH REYES RIVERA contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- (Radicado 05001-31-05-022-2018-00423-01).

### ANTECEDENTES

Pretende la demandante, previa declaración que al señor Jorge Humberto Restrepo Martínez le asiste el derecho a la pensión de invalidez post mortem, desde la fecha de estructuración de la invalidez, se condene a Colpensiones a reconocerle y pagarle la pensión de invalidez a favor del señor Restrepo Martínez desde la fecha de estructuración y hasta el día de su muerte; el reconocimiento y pago de la sustitución pensional por el fallecimiento de su cónyuge Jorge Humberto Restrepo Martínez, los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o, en subsidio, la indexación; y las costas.

Como sustento de sus pretensiones, argumentó lo siguiente: el señor Jorge Humberto Restrepo Martínez nació el 16 de septiembre de 1958; la historia laboral de este establece que cuenta con 983 semanas cotizadas; él

presentó graves problemas de salud que desencadenaron su muerte el 18 de noviembre de 2017; en varias oportunidades solicitó la pensión de invalidez, pero por los trámites burocráticos que exige la entidad, no le recibieron la documentación para que le calificaran la pérdida de capacidad laboral siendo que cumplía con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez; como cónyuge procedió a calificar la pérdida de capacidad laboral del señor Jorge Humberto Restrepo Martínez de manera posterior a su muerte (post mortem), y dicho dictamen fue realizado por la IPS UNIVERSITARIA, estableciendo que el fallecido contaba con una pérdida de capacidad laboral del 63.50%, con fecha de estructuración del 19 de abril del 2016; convivió con su esposo de manera permanente y sin interrupciones desde el 29 de marzo de 1980 hasta el día de su muerte el 18 de noviembre de 2017, dependiendo económicamente de este; se elevó solicitud ante Colpensiones pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez post mortem por el fallecimiento de su cónyuge y, posteriormente, el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, la misma que fue resuelta por la entidad mediante Resolución SUB 93922 del 9 de abril de 2018, negando la pensión de sobrevivientes, sin que haya tenido en cuenta la reclamación de la pensión de invalidez; se presentaron los recursos de ley, los que fueron confirmados mediante Resoluciones SUB 130303 y DIR 10261 de mayo de 2018, quedando agotada la vía gubernativa.

COLPENSIONES dio respuesta oportuna al libelo oponiéndose a la prosperidad de todas las pretensiones. De los hechos adujo como ciertos los de la fecha del fallecimiento del causante, la solicitud elevada por la accionante deprecando las prestaciones y las respuestas dadas por la entidad. Sobre los demás dijo que no le constaban. Formuló como excepciones las que denominó inexistencias de la obligación del reconocimiento de la pensión de invalidez post mortem de Jorge Humberto Restrepo Martínez, inexistencia de la obligación de reconocer la sustitución pensional sobre una prestación no reconocida; inexistencia de la obligación

Rad. 05001-31-05-022-2018-00423

de reconocer intereses moratorios, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y compensación.

Luego de realizarse el trámite correspondiente, el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 8 de septiembre de 2021, declaró que al señor Jorge Humberto Restrepo Martínez le asistía el derecho pensional póstumo por invalidez, por riesgo común, a partir del 22 de abril de 2016 y hasta su muerte en noviembre 18 de 2017, a razón de 13 mesadas pensionales por año, cada una equivalente al salario mínimo legal mensual vigente. Condenó a Colpensiones a pagar en favor de la masa sucesoral del señor Jorge Humberto Restrepo Martínez, representada por la actora, la suma de \$14.231.732 como retroactivo pensional causado entre el 22 de abril de 2016 y 18 de noviembre de 2017, debidamente indexada, autorizando a la entidad a que haga los respectivos descuentos para el Sistema de Salud. Declaró que la señora María Yanith Reyes Rivera tiene derecho a la sustitución pensional en relación con la pensión de invalidez de origen común del señor Jorge Humberto Restrepo Martínez, a partir del 18 de noviembre de 2017, en consecuencia, condenó a la accionada a reconocerle y pagarle la suma de \$39.329.510 por concepto de retroactivo pensional de la sustitución pensional liquidado entre el 18 de noviembre de 2017 y el 31 de agosto de 2021, respecto de la cual deberá pagarse la indexación. A partir del 1° de septiembre de 2021, Colpensiones deberá seguir pagando una mesada pensional equivalente al SMLMV, autorizándola para que del retroactivo descuenta lo relativo a las cotizaciones para el Sistema de Salud. Le impuso las costas a la administradora, fijándole como agencias en derecho la suma de \$4.017.093.

Inconforme con la decisión, interpuso el recurso de apelación la apoderada de la entidad demandada, exponiendo como argumentos que la calificación respecto de la pérdida de capacidad laboral del causante fue mediante un dictamen pericial privado que fue realizado post mortem por la IPS Universitaria, indicando que la ley hace referencia a que para acceder a la

pensión de invalidez inicialmente se debe determinar si el afiliado es inválido a través de un dictamen que deben realizar las juntas de calificación, así como el de analizar la densidad de semanas que se tengan cotizadas antes de la estructuración de ese estado. Refiere que el dictamen presentado no fue realizado por Colpensiones ni se controvertió ante las Juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez y, por lo tanto, el requisito de la pérdida de capacidad laboral no se alcanzó, motivo por el que la entidad no reconoció la prestación que le reclamó el causante.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES

La Sala restringirá su estudio a los puntos objeto de apelación planteados por la apoderada recurrente, conforme a las directrices que para el efecto traza el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, y de ser necesario las demás condenas impuestas a Colpensiones en el grado de consulta, de conformidad con el criterio expresado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias del 26 de noviembre y 4 de diciembre de 2013, rads. 34552 y 51237, y la sentencia con Radicado 40200 del 9 de junio de 2015.

No es tema de discusión al interior del plenario que el señor Jorge Humberto Restrepo Martínez falleció el 18 de noviembre de 2017, ni que éste había contraído matrimonio católico con la señora María Yanith Reyes Rivera el 29 de marzo de 1980, y que la última cotización al sistema de pensiones por parte del afiliado fallecido fue en el ciclo del mes de diciembre de 2015. Tampoco se discute que después de fallecido, al señor Jorge Humberto Restrepo Martínez se le realizó un dictamen con el fin de determinarle la pérdida de capacidad laboral, el cual fue elaborado el 19 de febrero de 2018

Rad. 05001-31-05-022-2018-00423

por la IPS UNIVERSITARIA, definiéndola en 63.50%, de origen común y con fecha de estructuración el 22 de abril de 2016.

Con fundamento en lo anterior y a los argumentos de la alzada, el problema jurídico se circunscribe en determinar si en el asunto se cumplen los presupuestos necesarios para inicialmente reconocerle post mortem la pensión de invalidez al señor Jorge Humberto Restrepo Martínez y, posteriormente, para el evento en que la respuesta sea positiva, si la señora María Yanith Reyes Rivera reúne los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes.

Lo primero por decir es que el Juzgador que conozca de una controversia sustentada en diferencias frente a una o más experticias, conforme a la potestad de apreciar libremente la prueba (art. 61 del C.P. del T. y de la S.S.), puede perfectamente acoger aquella que le dé mayor credibilidad o lo persuada mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso, sin que ello implique necesariamente una trasgresión al debido proceso y al derecho de defensa, pues en últimas es el operador como director del proceso quien está revestido de potestades legales para tomar una decisión.

Así lo ha estimado por demás la Sala Civil de la CSJ, en sentencia del 15 de junio de 2016, SC 7817-2016 (M.P. Dra. Margarita Cabello Blanco) donde frente a dicha facultad valorativa expresó:

*“El Juez, al observar las conclusiones del dictamen, deberá comprender el tema probatorio, primero, desde el perfil científico que lo identifica y distingue y luego interiorizarlo, arropándolo con el manto jurídico y las consecuentes derivaciones, que provocará la sentencia, sin olvidar y sobre ello se reitera, que la potencial relevancia de la prueba científica para esclarecer el hecho o para establecer la convicción sobre la verdad del hecho, no es desde luego absoluta.*

*No se le puede pedir al Juez que posea una sapiencia igual o superior a la del perito, por lo que el control de la prueba, como ya se esbozó en anotación anterior, se realizará mediante el*

*análisis del grado de aceptabilidad de los conocimientos entregados o por la racionalidad del procedimiento y conclusiones, ponderando con cautela y guiándose por el esquema racional que le permitirá, a través de las reglas de la sana crítica, calibrar y establecer el mérito del medio persuasivo. (...).*

*Es él quien cuenta con la suficiente formación para desecharla y por ende apartarse de sus conclusiones o darle el mérito total o parcial que encuentre más ajustado al caso. Por ende, se torna en una exigencia sine qua non que debe ofrecer todo dictamen pericial para que pueda admitirse como prueba de los hechos que analiza, la debida y adecuada fundamentación; “y compete al juzgador apreciar con libertad esa condición, dentro de la autonomía que le es propia”.*

En igual sentido, la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia con Radicado 70662 del 6 de diciembre de 2016, en la que se reiteró que:

*“...en virtud de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal Laboral, en los juicios del trabajo los jueces gozan de libertad para apreciar las pruebas, por lo que si bien el artículo 60 ibídem les impone la obligación de analizar todas las allegadas en tiempo, están facultados para darle preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, pues en tal caso “no se podrá admitir su prueba por otro medio”, tal y como expresamente lo establece la primera de las citadas normas.*

*Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo afirmado en sentencia de 27 de abril de 1977, inédita, que fue ratificado por la Sala, entre otras, en sentencia de 5 de noviembre de 1998 (Radicación 11.111).*

*"El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo.*

*"Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas*

*en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada.*

*"La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho.*

*"Corresponde es los juzgadores de instancia la facultad de establecer el supuesto de hecho al que debe aplicarse la ley, y de allí que el mentado artículo 61 del Código Procesal Laboral les haya otorgado la facultad de apreciar libremente las pruebas, lo que hace que resulte inmodificable la valoración probatoria del Tribunal mientras ella no lo lleve a decidir contra la evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en el proceso".*

Ahora bien, para resolver el primero de los asuntos, se tiene que el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 refiere que *"Para los efectos del presente Capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral"*; a su vez, el artículo 41 del mismo compendio normativo indica que el estado de invalidez debe establecerse mediante la valoración científica que efectúan entre otras, las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL; las Compañías de Seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte y las EPS, con base en el Manual Único para la Calificación de Invalidez expedido por el Gobierno Nacional, calificaciones que pueden ser sometidas a consideración de las Juntas de Calificación de Invalidez del orden regional en primera instancia, y que son apelables ante la Junta Nacional de Calificación.

Desde la sentencia C-1002 de 2004, se adoctrinó que el dictamen de dichos organismos es indispensable para resolver si se concede o no la pensión de invalidez y la H. Corte Suprema de Justicia ha estimado que en la actualidad el estado de invalidez de un trabajador corresponde establecerse mediante la valoración científica de las juntas de Calificación por tratarse de conceptos técnicos y científicos emanados de órganos autorizados por el legislador; sin embargo, también se ha anotado que los dictámenes de las juntas de calificación, a pesar de su importancia, no representan conceptos definitivos e inmutables, sino pruebas del proceso que bien pueden ser revaluadas o desvirtuadas por el juez del trabajo, en ejercicio de sus libertades de valoración probatoria y que pueden controvertirse ante los jueces del trabajo, quienes tienen competencia para examinar los hechos que contextualizan la condición incapacitante establecida por aquellas, contando el Juez con amplias potestades probatorias y de reconstrucción de la verdad real del proceso, de manera tal que puede darle credibilidad plena al dictamen o someterlo a un examen crítico integral o de alguno de sus elementos, hasta el punto de apartarse legítimamente de sus valoraciones y conclusiones (Ver SL5280-2018, SL2349-2021, SL2627-2022).

Siendo lo anterior así, las partes cuentan con todas las facultadas para discutir el contenido de los dictámenes que emiten las entidades calificadoras que permite el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 ante la jurisdicción ordinaria laboral, bien sea aportando un nuevo dictamen, o bien ordenándose por el Juez la realización de otro, por lo que bajo este contexto, los dictámenes no tiene que ser necesariamente emitidos por la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, sino que puede serlo por otro ente especializado en el asunto objeto de valoración; y ya teniéndose para su análisis diferentes conceptos científicos sobre el estado de salud de una persona, los falladores pueden soportar su decisión en el que les ofrezca mayor credibilidad y poder de convicción en relación con los demás elementos de prueba (SL4346-2020).



En el asunto, la prueba allegada por la actora para acreditar el estado de invalidez de su cónyuge fallecido como uno de los requisitos que el legislador dispuso frente a la prestación perseguida, se trata de una experticia rendida por la IPS UNIVERSITARIA a través del médico especialista en salud ocupacional José William Vargas Arenas, quien a partir de la valoración que desplegó, asignó una pérdida de capacidad laboral del 63.50%, con fecha de estructuración del 22 de abril de 2016 derivada de los diagnósticos “Cardiomiopatía isquémica, Diabetes mellitus insulín dependiente con complicaciones múltiples, Hipertensión esencial (primaria) y otras isquemias cerebrales transitorias y síndromes afines”, calificando las deficiencias por cardiopatías y miocardiopatías - tabla 2.4-, y deficiencias por diabetes mellitus -tabla 8.10- del Decreto 1507 de 2014.

Así, lo primero por verificar es que tal medio pericial se ciña a los requisitos formales para asignársele mérito demostrativo, dentro de los que se destacan en coherencia de lo que consigna el artículo 226 del CGP aplicable al procedimiento laboral en virtud de lo dispuesto en el 145 del CPTSS: (I) ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; (II) explicar los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas; (III) exponer los fundamentos técnicos y científicos de las conclusiones; (IV) incluir los datos de contacto del perito; (V) explicitar la profesión, oficio, arte o actividad que es ejercida por el experto, anexando los títulos académicos y la prueba de su experiencia; (VI) señalar los casos en que el perito ha participado y, en caso de haber aplicado técnicas diferentes a la considerada para el caso, indicar las razones para ello; y (VII) manifestar que no se encuentra en una situación que le impida actuar como perito (Ver SL1420-2022).

Es de anotar que si bien el dictamen de pérdida de capacidad laboral fue emitido por la IPS UNIVERSITARIA, allegan igualmente documentos para demostrar la idoneidad del perito, de donde pueden desprenderse de la hoja de vida los títulos académicos alcanzados como médico cirujano especialista en gerencia de la salud ocupacional, con diplomado en gestión

en salud y calificación de la invalidez “MUCI IV”, y un listado en los cuales ha participado en trámites judiciales estando de por medio la calificación de pérdida de capacidad laboral. calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional en Colombia, la renovación de la licencia para prestar servicios a terceros en salud ocupacional por el término de 10 años expedida por la Gobernación de Antioquia - Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia- lo que da cuenta que se encuentra habilitado para su ejercicio, además de relacionar su experiencia profesional en trámites judiciales donde está inmiscuido el tema de la calificación de pérdida de capacidad laboral.

Ahora, el dictamen emitido por la IPS UNIVERSITARIA en efecto acogió el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral vigente - Decreto 1507 de 2014 - siguiendo los parámetros de evaluación correspondientes a las deficiencias en sus diferentes tipos y categorías, pero debe dejarse claro que el mismo se realizó con fundamento en la historia clínica del causante por cuanto éste, para la data de su elaboración, ya se encontraba fallecido.

Sobre el dictamen, esta Sala de Decisión no observa una experticia clara, precisa, exhaustiva y detallada teniendo en cuenta que no aparecen registrados los fundamentos técnicos y científicos de las conclusiones a las que se llegó, y siendo que el dictamen se estaba realizando de una persona fallecida, no se profundizó en cuanto a las explicaciones frente a los diagnósticos motivos de calificación, y que si bien este tuvo como fundamento la historia clínica del causante, pues en esta se referencian las patologías fruto de la calificación, se ignora cuál fue el motivo para determinar las calificaciones otorgadas tanto frente a la enfermedad cardiovascular como a la diabetes mellitus, por cuanto para la determinación de cada clase que asignaba el porcentaje plasmado en las tablas 2.4 y 8.10 aparece una serie de descripciones que brillan por su ausencia en el peritazgo, por lo que los escasos comentarios vertidos en el

Rad. 05001-31-05-022-2018-00423

mismo no resultan suficientes para dar por acertado los porcentajes con los que se definieron las deficiencias.

A más de lo anterior, el dictamen señala como sustentación de la fecha de estructuración textualmente lo siguiente:

*“SI BIEN EL PACIENTE FALLECIÓ COMO CONSECUENCIA DE PROCESO DE CARCINOMATOSIS, ES CLARO Y EVIDENTE EN LA HISTORIA CLÍNICA QUE PRESENTABA ANTECEDENTES MÚLTIPLES DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR DE BAJO GASTO CARDIACO CLASE FUNCIONAL III Y OTRAS PATOLOGIAS COMO LA DIABETES INSULINODEPENDIENTE QUE AL MENOS DESDE EL 22/04/2016, SEGÚN HISTORIA CLÍNICA APORTADA, YA LE CONFERÍA INVALIDEZ DE ORIGEN COMÚN”.*

Ahora bien, analizada la historia clínica, no encuentra justificación esta Sala de Decisión el que se haya tomado como fecha de estructuración del estado de invalidez del señor Jorge Humberto Restrepo Martínez la data descrita en el dictamen, por cuanto las mismas patologías venían siendo descritas desde fechas anteriores, pues nótese como para el 19 de abril de 2016, se dice:

*“Paciente con múltiples factores de riesgo cardiovascular, enfermedad coronaria revascularizada, HTA, DM2, tabaquismo activo. Ahora con episodio de ECV isquémico frontal izquierdo de etiología cardioembólica. Se documenta falla cardíaca con FEVI deprimida (30%) y trombo intracavitario. Requiere anticoagulación a largo plazo, hoy día +7 del evento por lo que según recomendaciones de neurología, se puede iniciar anticoagulación plena”.*

A más de lo anterior, no resultan evidentes las pautas tenidas en cuenta en el dictamen pericial para la valoración del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales, pues solo se limitan a señalar los valores dados sin que se especifique el origen de los mismos.

Rad. 05001-31-05-022-2018-00423

Debe dejarse claro que el Decreto 1507 de 2014, frente a la patología de diabetes mellitus, describe claramente los parámetros a considerar, indicando textualmente lo siguiente:

*“Por lo tanto, desde un punto de vista endocrinológico, la diabetes mellitus se valora principalmente por la necesidad de medicación, la vía de administración de la medicación, la necesidad de pruebas de sangre y la necesidad de ajustes en la dieta. Otros factores de importancia en la evaluación clínica son los problemas ocasionados por la hiperglicemia y la hipoglucemia. Cada condición puede causar síntomas, así como las hospitalizaciones. Para evaluar integralmente la deficiencia creada por la diabetes, como un indicador de interferencia importante en la vida normal de una persona...”*

Valoraciones éstas que brillan por su ausencia en el dictamen rendido por la IPS UNIVERSITARIA frente a la pérdida de capacidad laboral del señor Jorge Humberto Restrepo Martínez, pues lo que se denota es un pronunciamiento general y no específico que le lleve el pleno conocimiento al juzgador de la realidad que está efectivamente vertiendo en el dictamen, sin que resulte viable echar mano de algún otro medio probatorio por cuanto para la determinación del estado de invalidez de un afiliado, los dictámenes de pérdida de capacidad laboral resulta ser la prueba que da mayor certeza frente a las condiciones de salud de determinada persona en el transcurso de su vida, significando que no se configuran los elementos propios para darle validez al único medio probatorio del que la parte actora se vale para demostrar las condiciones de salud del causante, y, por tanto, el mismo no se pueda tener como soporte para la imposición de alguna condena, por lo que la pensión consecuente de sobrevivientes no puede tampoco ser reconocida.

Por lo anterior, como quiera que se incumplió con la carga procesal tendiente a la demostración del estado de salud del señor Jorge Humberto Restrepo Martínez con un criterio técnico-científico, a más de que no existe alguna otra probanza que le permita a esta Sala de Decisión determinar su estado de invalidez, se impone en esta instancia la obligación de revocar la sentencia venida en apelación, en atención a que la pensión de

Rad. 05001-31-05-022-2018-00423

sobrevivientes resultaba consecuente de la pensión de invalidez post mortem que se había reconocido, a más de que este último derecho tampoco había sido causado por el señor Restrepo Martínez, por cuanto su deceso se dio el 18 de noviembre de 2017, y en los tres años anteriores a tal data, alcanzó a cotizar un total de 24.72 semanas, densidad muy inferior a las 50 exigidas por la norma aplicable a su caso.

Las costas de las instancias estarán a cargo de la parte actora. En esta se fijan como agencias en derecho la suma de medio (1/2) salario mínimo legal mensual vigente.

### DECISIÓN:


En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **REVOCA** la sentencia venida en apelación de fecha y procedencia conocidas y, en su lugar, **ABSUELVE** a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIOENS -COLPENSIONES-, de todas las pretensiones formuladas en su contra por la señora MARÍA YANITH REYES RIVERA.

Costas de las instancias a cargo de la demandante. En esta sede las agencias en derecho se fijan en medio (1/2) salario mínimo legal mensual vigente.

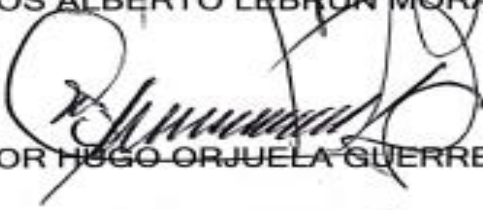
Notifíquese la presente decisión por EDICTO (num.3°, lit. d., art. 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el auto 550-2021 CSJ).

Rad. 05001-31-05-022-2018-00423

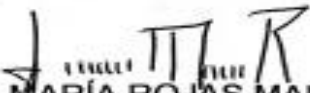
Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Rad. 05001-31-05-022-2018-00423

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

**Radicación:** 05001310502220180042301  
**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Demandante:** MARIA YANITH REYES RIVERA  
**Demandado:** COLPENSIONES  
**M. P.** CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES  
**Fecha de fallo:** 28/03/2023  
**Decisión:** REVOCA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 29/03/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**

Secretario